

Individualización de Audiencia de lectura de sentencia.

Audiencia realizada de manera semipresencial

Fecha	Rancagua., diez de octubre de dos mil veinticuatro
Magistrado	CRISTIAN FREDES HERNÁNDEZ
Fiscal	MAXIMILIANO MARIÁNGEL PUGA (se excusa)
Defensor privado	CONSTANZA ÁVILA SAONA (por videoconferencia)
Hora inicio	01:07PM
Hora termino	01:11PM
Sala	Sala 1
Tribunal	Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua.
Acta/Sala	ADV
RUC	2300025386-3
RIT	427 - 2024

Actuaciones efectuadas

NOMBRE IMPUTADO	RUT	DIRECCION	COMUNA
FELIPE IGNACIO LEAL AVILEZ Comparece por videoconferencia – privado de libertad en C.P Rancagua	19.906.189-5	Calle Aguera Monasterio N° 066 Población Javiera Carrera N° 066	Curanilahue.

SENTENCIA

Rancagua, diez de octubre del dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Ante esta Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, constituida por el juez don Cristian Fredes Hernández, quien presidió la audiencia, y los magistrados don Raúl Baldomino Díaz y doña Paulina Bossy Chaparro, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la causa **RIT N° 427-2024**, seguida contra **FELIPE IGNACIO LEAL AVILEZ**, cédula Nacional de Identidad N° 19.906.189-5, 26 años, nacido en Concepción el 7 de enero de 1998, soltero, conductor de UBER, domiciliado en calle Agueda Monasterio N° 066, Población Javiera Carrera, comuna de Curanilahue.

Sostuvo la acusación del Ministerio Público, el fiscal don Maximiliano Mariángel Puga y la defensa del acusado estuvo a cargo de la defensora particular doña Constanza Ávila Saona; ambos con domicilio y forma de notificación registrados en el Tribunal.

SEGUNDO: Los hechos de la acusación fiscal fueron los siguientes:

“El día 7 de enero del año 2023 a las 02:50 horas de la madrugada aproximadamente, personal de carabineros efectuaba un patrullaje preventivo por calle Edmundo Cabezas con la intersección del pasaje El Portillo en la

comuna de Rancagua, momento en el cual pasa un vehículo marca Nissan color blanco el cual no tenía puesta la placa patente trasera, por lo que personal policial procede a seguirlo y fiscalizar dicho vehículo consultándole al conductor que era en ese momento el acusado Felipe Leal Avilés por la placa patente manifestando y mostrando el imputado las dos placas patentes del vehículo y al mismo tiempo identificándose como funcionario de carabineros que se encontraba saliente de servicio del segundo turno y que según el imputado prestaba servicios en la comuna de Cerro Navia, exhibiendo una placa de servicio TIPCAR que es la tarjeta de identificación personal de carabineros, manteniendo esta TIPCAR una fotografía borrosa por lo que se consultó a CENCO por el funcionario en este caso por el Felipe Leal Avilés y si este se encontraba activo, recibiendo como respuesta por parte de la central cenco no figuraba el nombre de Felipe Leal Avilés en el sistema de carabineros como funcionario de la misma institución, manifestando el acusado en ese momento que se encuentran calidad de retiro, lo que llamó la atención del personal policial porque si estuviese con retiro temporal no debería andar con su placa de servicio por lo que se procedió a la revisión del vehículo en su totalidad encontrando en el asiento trasero del vehículo una mochila de color gris, dónde al revisarla por personal policial el acusado se niega, se revisa la mochila y se encuentran 8 paquetes de clorhidrato de cocaína, una sustancia de color blanca con rosado, estando envuelta aquella en papel aluza, manifestando el acusado que el solo realizaba la entrega, señalándole a personal de carabineros comillas “usted sabe cómo es esta cosa cuando lo echan no agradecen nada” manteniendo la cantidad de \$100.000 en dinero efectivo y diciéndole a personal de carabineros que, tenía en ese mismo momento que se quede con ese paquete y que les entregaría la suma de \$1.000.000 si no adoptaban el procedimiento y lo dejaban en libertad, por lo que personal policial procedido a la detención del acusado y a la incautación de todas las especies llegando, personal OS7 realizando la respectiva prueba de campo, arrojando la prueba de campo coca test y análisis trunarc la cantidad de 7 kilos 605 gramos y 100 miligramos de clorhidrato de cocaína que el imputado transportaba en ese vehículo.” (sic)

A juicio del Ministerio Público los hechos son constitutivos del **delito de tráfico de estupefacientes** de los artículos 1 y 3 de la ley 20.000, **el delito de fingir autoridad o ser funcionario público** del artículo 213 del Código Penal y **el delito de cohecho** del artículo 250 del mismo cuerpo legal. El acusado es

autor directo e inmediato, conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal, de estos delitos en grado de ejecución consumados.

Le beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, por lo que pidió las siguientes penas: **Por el delito de tráfico de estupefacientes** se le aplique una pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 100 UTM, más la pena accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, comiso de las especies incautadas en especial del vehículo incautado patente RKS.R.43 y el pago de las costas de la causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal. Por el **delito de Fingir autoridad o ser funcionario público** del artículo 213 del Código Penal se le aplique una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, multa de 6 UTM, accesorias del grado y costas de la causa. Por el **delito de Cohecho** del artículo 250 del Código Penal en relación con el 248 bis del mismo cuerpo legal se le imponga una pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo por el mismo plazo, multa de \$2.000.000, y costas de la causa.

En la clausura, sostuvo que con la prueba rendida se pudo establecer la existencia de los delitos contenidos en la acusación fiscal, considerando la prueba aportada, en especial con las declaraciones de los funcionarios policiales, en especial la del Sargento Ávila quien dio cuenta que el procedimiento se inició con la fiscalización de un automóvil sin placas patentes, que de inmediato después de solicitar la licencia, el acusado se identificó como carabinero y le exhibió la DIPCAR, no figurando como funcionario activo. Se revisó la mochila, sin dejar de mencionar que la mencionada tarjeta estaba vencida, pero lo concreto es que el acusado reconoció el ofrecimiento a los carabineros difiriendo de lo ofrecido a ellos, pero en definitiva se realizó. Los otros funcionarios dieron cuenta que se trataba de droga y que la DIPCAR era de aquellas fidedignas, pero con su foto borrosa y tenía un encargo por robo previo a la baja del acusado. Destacó que esa denuncia tenía un fin, cual era quedarse con la placa con el fin de efectuar y tener beneficios propios en el futuro, lo que resulta relevante. Es un fingimiento por parte del imputado, pero esta identificación fue exhibida para evitar su control. Todo ello permite determinar la existencia de los tres delitos por los que se acusó. Por ello solicitó la condena del acusado.

Al replicar, se opuso a la recalificación al delito de microtráfico porque en el caso en particular se trató de una gran cantidad, cuyo destino era su distribución, probablemente el mismo acusado no lo sabía, pero ante un porcentaje menor de pureza existe igual afectación al bien jurídico protegido. En cuanto al delito del artículo 213, al identificarse como carabinero y exhibir la DIPCAR, realizó una acción más allá del simple fingimiento.

En la audiencia de determinación de penas, acompañó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, quien se presenta sin anotaciones pretéritas y por eso les favorece la minorante de irreprochable conducta anterior, del artículo 11 N°6 del Código Penal, reconocida en la acusación. Solicitó el rechazo del reconocimiento de la atenuante de colaboración sustancial, puesto que sus dichos no tuvieron la sustancialidad necesaria para calificar su conducta. En cuanto al delito de tráfico de drogas, solicitó la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, comiso de especies, tanto de dinero como del vehículo usado por el acusado, multa de 100 UTM y las costas de la causa.

En cuanto al delito del artículo 213 inciso 2° del Código Penal, pidió la pena de prisión de 30 días más multa de 6 UTM.

En relación con el delito de cohecho, mantuvo su pretensión punitiva.

Se opuso a la concesión de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, pues en caso de reconocerse la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código del ramo, por la naturaleza de los delitos por los cuales se acusó, ya que excede del tiempo previsto en la norma, por lo que el cumplimiento de la sanción deberá ser de manera efectiva.

TERCERO: La defensa en la apertura, señaló que el veredicto será condenatorio, porque su representado declarará al tenor de los hechos y comentará en detalle lo señalado en la acusación, por lo que se pedirá el reconocimiento del artículo 11 N°9 del Código penal, estando a lo que se resuelva por estos sentenciadores después de escuchar la prueba.

En la clausura, planteó que tal como lo prometió en la apertura, y aun cuando existieron algunas imprecisiones respecto a la forma como se habría hecho el ofrecimiento a los carabineros al momento de la detención, es importante destacar que el relato del funcionario Ávila no fue corroborado por su acompañante, por lo que solo se está frente a dos declaraciones de igual valor, sobre todo cuando existió un relato claro y preciso del acusado. Hubo un delito de tráfico, pero entiende que, por la inocuidad de la droga, ya que la pureza de la cocaína era de solo 12 % de pureza, aquello permite calificar el

delito como uno de microtráfico, porque se trata de un ilícito de emprendimiento, aquello considerando la conducta incorporada en base a su declaración y del carabinero, tratándose del último eslabón de la condena.

En cuanto al delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, se acatará que el veredicto será condenatorio, entendiendo que el delito está consumado por el solo hecho de haber realizado la oferta, respecto del cual se contó con la admisión de responsabilidad de su defendido consistente en los \$ 100.000 que le fueron entregados por el dueño del bolso como pago por el transporte.

En relación al delito de fingir autoridad, hizo presente la existencia de jurisprudencia que entiende que existen dos hipótesis en la norma, estimado que el configurado es el del inciso 2° del artículo 213 del Código penal, pues solo se identificó como funcionario de carabineros, es decir solo fingió tener dicha calidad, sin realizar actividades o acciones propias de un policía, como firmar un parte o intervenir en una detención; destacó que en caso de acogerse su propuesta, el delito debe ser considerado en grado de tentativa. Se constató de la prueba aportada, que el acusado fue retirado de la institución por problemas médicos, según lo señalado por Valdés, quien lo confirmó y entregó detalles del encargo por robo de la placa y la DIPCAR, lo que ocurrió de manera previa a este hecho, y lo dicho por la fiscalía es solo una especulación.

En la audiencia de determinación de pena, solicitó el reconocimiento de la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, lo que admitió el señor fiscal, pues el extracto de filiación y antecedentes se encuentra exento de reproches. También argumentó, el reconocimiento de la minorante del N°9 del artículo 11 del mismo cuerpo legal, ya que su defendido entregó detalles de lo sucedido admitiendo responsabilidad, no solo en audiencia sino también durante la investigación.

En cuanto al delito de tráfico de drogas pidió la aplicación en el mínimo legal, es decir 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 UTM, sin oponerse al comiso del dinero y del automóvil. En el caso del ilícito del artículo 213 inciso 2° del Código del ramo, entendiendo que aquel se sanciona en grado de tentativa se imponga la pena de 21 días de prisión, y multa de un tercio de UTM. Por último, en cuanto al delito de cohecho, pidió la rebaja en un grado de la pena resultando aplicable la de 541 días de presidio

menor en su grado medio, solicitando la rebaja prudencial de la multa y se imponga solo en \$ 50.000, siendo la mitad de lo ofrecido.

Pidió, además, la exención del pago de las costas de la causa

Para finalizar y atendido el mérito de la pretensión punitiva solicitada, se conceda la Libertad Vigilada intensiva del artículo 15 bis de la Ley N° 18.216, para cual aportó dos informes, uno social y otro psicológico.

CUARTO: Finalizados los alegatos de apertura, el **acusado Leal Avilez** estuvo por declarar, renunciando a su derecho a guardar silencio y señaló que siendo aproximadamente las 12.30 de la noche recibió un mensaje WhatsApp a su teléfono de un cliente al que le prestaba servicio de Uber, lo que había hecho en varias ocasiones trasladando a su hijo y a su señora. Él le pidió que fuera a Pedro Aguirre Cerda con Antonio Machado. Llegó al lugar a la una de la mañana, le dijo que necesitaba un favor, el que consistía en llevar esa mochila a una ubicación que envió por WhatsApp, le dijo que era algo ilegal y le pasó \$ 100.000. Fue carabinero, y lo hizo por necesidad, ya que había salido de la institución por imposibilidad física, por eso aceptó. Se consiguió un vehículo a última hora que le pertenecía a una vecina, y se vino a Rancagua. Cuando ya estaba en Rancagua, iba por el pasaje El Portillo en dirección al norte, cuando apareció carabineros tras él, ya eran casi las 3 de la mañana, hicieron sonar el aparato sonoro, se quedó en blanco y detuvo su marcha, no arrancó, tampoco los trató mal, ellos descendieron de la patrulla, se trataba de un carabinero y un sargento segundo, por miedo, les dijo que venía saliente del segundo turno desde la comuna de Cerro Navia, al sargento le mostró la placa y la TIPCAR que era suya, pero su foto estaba borrosa por el tiempo. Ellos consultaron a Cenco y le dijeron que tenía un retiro temporal, los dejó revisar el maletero lo que hicieron minuciosamente. La mochila estaba en el asiento trasero, a simple vista, la abrieron y encontraron los ocho paquetes. Al tratar de zafar de la detención, les dijo ¿qué hacemos? estaba nervioso, nunca había hecho eso, él le dijo que era su trabajo y que debía detenerlo. Luego, llegó otro carro policial con dos cabos primeros y lo detuvieron, desde ese día está en prisión preventiva. Señaló que en dos oportunidades prestó declaración ante el fiscal anterior, Sergio Moya detallando todo lo ocurrido, y entregó toda la información con la que contaba. Esto tuvo repercusiones dentro de la cárcel, ya que recibió puñaladas en su brazo. Incluso aportó la georeferenciación de los lugares desde donde salió y donde debía llegar, y de eso no tuvo noticia.

Al fiscal señaló, que fue carabinero por 5 años, alcanzó el grado de carabinero. En ese momento trabajaba como Uber con un vehículo marca Chevrolet, modelo Spark. El vehículo que usó cuando fue detenido era de una vecina, las placas patentes no estaban adosadas al móvil, sino que en el parabrisas. Sabía que lo que transportaba era droga. Admitió que ofreció dinero a los carabineros los mismos \$ 100.000 que le habían entregado, esto lo dijo para evitar la detención, nunca ha consumido, nunca estuvo involucrado en estas cosas, ni siquiera como carabinero cuando trabajaba en la institución.

A la defensa señaló, que la persona que lo contactó lo conocía de antes, porque trasladaba a la señora y al hijo, no sabía qué hacía este sujeto. Ese día fue el primer acercamiento con droga que tuvo con ese sujeto. La mochila le fue entregada enfrente a una casa en Pedro Aguirre Cerda con calle Antonio Machado, dos casas hacia el sur, quien subió la mochila fue una persona extranjera de piel oscura, cree que el joven debe haber tenido unos 17 años. Supo que era droga porque él mismo que le hizo el encargo se lo dijo, pero desconocía de qué tipo. Los \$ 100.000 los tenía en efectivo, en billetes de 10.000 y les dijo incluso que se llevaran todo. La tarjeta de identificación de carabineros es la que exhibió, se llama TIPCAR. La mantenía en su poder, porque no se la retiraron.

Al ser detenido por carabineros, se bloqueó, no reaccionó no se fue ni se zafó. No opuso resistencia al momento de la detención.

Al Tribunal respondió que la tarjeta de identificación se le incautó. Estaba sometido a un retiro temporal por carabineros por imposibilidad física, tenía un plazo de dos años para justificar que tenía condiciones para reingresar a la institución, llevaba meses con licencia, al sufrir de escoliosis tenía problemas con el uso del cinturón y el chaleco antibalas, que pesan más de 3 kilos, y no podía estar mucho tiempo de pie.

En la **oportunidad procesal del artículo 328 del Código Procesal Penal** no dijo nada.

QUINTO: Los intervinientes no arribaron a convenciones probatorias.

ANTECEDENTES PARA ACREDITAR LOS DELITOS

SEXTO: Para acreditar estos hechos, el señor fiscal presentó al funcionario de carabinero que tomó parte en el procedimiento. En primer lugar, declaró el **Sargento 2° de carabineros Rodrigo Israel Ávila González** quien contó que el día de 7 de enero estaba de tercer turno realizando un

patrullaje en calle Edmundo Cabezas con Pasaje El Portillo, cuando observaron un auto blanco sin patentes, procedieron a su fiscalización, el conductor les exhibió los documentos personales y del automóvil, al preguntarle por las placas patentes, dijo que estaban en el maletero, lo que era efectivo, estaban las dos en ese lugar. Luego, el sujeto se identificó como funcionario de carabineros saliente de servicio, y exhibió su placa y la tarjeta TIPCAR la que tenía su foto bien borrosa, procedieron a consultarla en la central, informándoles que no figuraba en el registro. Él les indicó que estaba en retiro temporal. Lo que le llamó la atención, porque cuando un funcionario se va de retiro debe entregar la placa, la que tenía características de una original, solo que la foto estaba borrosa. Se consultó con SAICAR o DIPOLCAR quienes indicaron que el funcionario había sido dado de baja. Por ello procedieron a revisar el vehículo en su totalidad, al principio el procedimiento se justificó por la ausencia de las placas patentes y después por mantener una identificación que no debía portar. Al interior del auto en el asiento trasero había una mochila color gris la que se intentó revisar, pero él se negó a ello. La abrieron y observaron paquetes en su interior, se le preguntó por la procedencia, y dijo que solo las transportaba. Les dijo que ellos debían saber cómo es la situación cuando se les da de baja. Por ello se procedió a la detención. Cuando le comunicaron la detención, él insistió que solo la transportaba y que tenía \$ 100.000 y que nos quedáramos con los paquetes y que el lunes que seguía les podía pasar un millón de pesos, que no tenía en ese momento.

Luego de la detención, se tomó el auto y se trasladó a comisaría, se dispuso la concurrencia del OS7, para realizar pruebas de campo y la DIPOLCAR, verificando que no era funcionario de carabineros porque había sido dado de baja.

Las patentes eran del automóvil incautado.

En apoyo de su declaración se **exhibieron fotografías** correspondientes a las ofrecidas en Otros medios de prueba set N°1: **N°1** imagen del vehículo fiscalizado, que no mantenía la placa patente delantera; **N° 2** el mismo vehículo sin la placa patente trasera; **N° 3** Mochila con droga color gris; **N° 4** imagen de la droga incautada, las placas patentes y el dinero. El peso de la droga era como 7 kilos aproximadamente, vio que era una sustancia color blanca y rosada.

Esta persona mantenía su licencia de conducir donde figuraba su apellido como Leal. La TIPCAR se las exhibió rápidamente, porque es una tarjeta que se abre y se cierra, pero se la pidieron otra vez, además de que figuraba vencida. Vencen después de cada ascenso.

La defensa no formuló preguntas.

A la pregunta del tribunal señaló que la TIPCAR fue incautada.

A la defensa respondió que la TIPCAR se incautó, sin recordar si señaló que estaba vencida, pero él si se identificó con ella. No debía portarla al estar vencida. Esa tarjeta se remitió a carabineros.

Luego, se escuchó al funcionario **Sargento 1° de carabineros Aldo Valentín Fuentes Zúñiga**, quien señaló que el 7 de enero de 2023 se encuentra patrullando cuando recibieron un comunicado del sargento Ávila por infracción a la Ley N° 20.0000, el que solicitó que concurriera a la subcomisaría Diego Portales, donde estaba una persona de nombre Felipe Leal que se encontraba detenido y con cadena de custodia hizo entrega de 8 paquetes con una sustancia blanca, la que estaba enhuinchada y envuelta en papel aluza. Procedió a realizar la prueba de campo y pesaje, la que arrojó positivo a la presencia de clorhidrato de cocaína con un peso de 7 kilos 605 gramos 100 miligramos, evidencia que fue enviada al servicio de salud con oficio N° 7 de la Tenencia Diego Portales.

Se le **exhibió las fotografías** correspondientes al mismo set N° 1 de Otros medios de prueba: **N° 5** imagen de las muestras de prueba de campo a uno de los paquetes enhuinchados, con el equipo de análisis TRUNARC el que envió una alerta ante la presencia de clorhidrato de cocaína; **N°** imágenes de los 8 paquetes que muestra el pesaje unitario de cada uno, pero con un total de 7 kilos 605 gramos 100 miligramos.

La defensa no formuló preguntas.

A continuación, se contó con la declaración del **funcionario Suboficial mayor de carabineros Francisco Javier Valdés Ulloa** quien señaló que realizó diligencias y desempeña funciones en asuntos internos de carabineros, con fecha 7 de enero de 2023 la Cenco de Rancagua le comunicó a las 2 de la madrugada de un procedimiento que involucraba a un funcionario de carabineros, por lo que verificó los antecedentes. Ingresó datos en el sistema y efectivamente apareció Felipe Leal como exfuncionario, el que fue dado de baja por incapacidad física, tenía 5 años en la institución. Se dirigió a la unidad

Diego Portales, donde encontró la placa de servicio y una TIPCAR que él portaba, ambas tarjetas tenían encargo por robo.

A simple vista, las tarjetas tenían los antecedentes y características de una fidedigna, solo que parte de la foto estaba borrosa.

La defensa no formuló preguntas.

Al tribunal respondió que la persona controlada fue dada de baja por incapacidad física, cree que fue marzo de 2022. La denuncia o encargo por robo, fue cuando el cumplía funciones en carabineros, realizada por el mismo.

En relación con las sustancias ilícitas incautadas en la presente causa, se agregó **prueba documental y pericial**, consistente en los diferentes oficios e informes periciales sobre la naturaleza de las sustancias incautadas en el procedimiento policial: **1) Oficio N°7 del 7 de enero de 2023 de Subcomisaría de Carabineros, Diego Portales al Servicio de Salud Sexta Región, Departamento Jurídico**, remitiendo la droga decomisada en el procedimiento, con el siguiente detalle: 07 kilos, 605 gramos y 100 miligramos de Clorhidrato de cocaína, NUE 375098.

2) Acta de recepción 50-2023 del 7 de enero de 2023, por el cual la Unidad Decomisos dependiente del Departamento Jurídico del Servicio de Salud O'Higgins, recibe el decomiso enviado por carabineros de la Subcomisaría de carabineros "Diego Portales" de Rancagua, con el gramaje y NUE (detallados en el oficio anterior).

3) Reservado 29-2023, del Servicio de Salud O'Higgins Departamento Jurídico unidad Decomisos, al jefe subdepartamento sustancias ilícitas del Instituto de Salud pública, que remite las muestras de las sustancias incautadas por carabineros, citando la respectiva NUE y los 8 contenedores de nylos, de una sustancia color blanco para su análisis.

4) Reservado 3113-2023 del 11 de diciembre de 2023, por el químico farmacéutico Boris Ettienne Duffau Garrido, que remite a la Fiscalía Local de Rancagua copia del protocolo de análisis de las sustancias analizadas por esa institución. Analizadas las muestras 3113-2023-M1-1 correspondiente a la NUE 3750988, consistente en un polvo color blanco, el resultado del análisis fue cocaína clorhidrato al 12% y cafeína, ambas sustancias sujetas al control de la Ley N° 20.000.

5) Informes de efectos y peligrosidad, para la salud pública de la cocaína clorhidrato y de la cafeína. En el caso del primero consiste en un polvo fino de color blanco cristalino dependiendo de la presencia de

adulterantes y restos de químicos empleados químicamente; es un alcaloide que se extrae de las hojas de la coca a través de un proceso de precipitación. Estimula el sistema nervioso central y es una sustancia adictiva; su consumo aumenta el riesgo de sufrir trombosis, derrame cerebral y complicaciones cardiovasculares generando complicaciones al corazón y cerebro. Un mayor consumo genera una mayor tolerancia lo que obliga al consumidor a consumir niveles más altos para lograr el mismo efecto, pudiendo llegar a una sobredosis con consecuencias fatales. Esta sustancia está incluida en el artículo primero título I del decreto 867 de la ley 20.000, como sustancia capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Informe sobre efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cafeína: alcaloide del grupo de las xantinas, solido cristalino, blanco y de sabor amargo que actúa como estimulante del sistema nervioso central. Usado como agente adulterador de drogas de síntesis, provoca múltiples daños en la salud cuando es consumida en altas dosis o vías distintas de la oral. El uso crónico afecta el sistema cardiovascular, arritmias, irritabilidad, cefaleas, diarreas e insomnio. Produce efectos nocivos a nivel pulmonar. La cafeína ha demostrado tener una influencia nota en la adicción cuando es mezclada con otras drogas como la cocaína.

6) Copia de 5 páginas del Libro de servicios correspondiente al tercer turno de fecha 6 de enero de 2023 de la Subcomisaría Diego Portales.

7) Certificado de servicios, correspondiente al tercer turno de fecha 6 de enero de 2023 de la misma comisaría ya indicada.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL:

SEPTIMO: Tal como se adelantó en la deliberación, este Tribunal resolvió, en forma unánime, **condenar a Felipe Ignacio Leal Avilez**, como autor de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° con relación al artículo 1°, ambos de la ley N° 20.000; el delito de Fingir autoridad o ser funcionario público del artículo 213 inciso 2° del Código Penal; y, por el delito de cohecho del artículo 248 bis del mismo código.

CONDENA POR EL DELITO DE TRAFICO DE DROGAS:

OCTAVO: Este delito castiga a quien trafique, bajo cualquier título, con las sustancias a que se refiere el artículo 1° (sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud), o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier

medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias. Y se entiende que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.

Por lo tanto, los requisitos del tipo penal son 1) la acción de importar, exportar, transportar, adquirir, transferir, sustraer, poseer, suministrar, guardar o portar; como también inducir, promover o facilitar el uso o consumo de sustancias ilícitas; 2) que dicha acción recaiga sobre sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud; 3) que no exista autorización para esta actividad.

En cuanto al primer requisito, el persecutor imputó al acusado el verbo rector de poseer y transportar sustancias ilícitas, para lo cual se escuchó al carabinero Ávila González, quien estuvo a cargo del procedimiento y participó en el control vehicular realizado al acusado, cuando conducía sin las placas patentes del móvil. Señaló que luego de recibir información sobre la ubicación de las patentes, las que estaban en el maletero, el sujeto se identificó como funcionario de carabineros exhibiendo su placa y tarjeta TIPCAR, y que estaba saliente de turno. Sin embargo, al consultar esa información con CENCO y SAICAR, se les indicó que había sido dado de baja, por lo que no podía portar dichas tarjetas identificatorias. Sin embargo, aquello resultó suficiente indicio para proceder al registro del automóvil, encontrando en el asiento trasero una mochila color gris, contenedora de 8 paquetes de una sustancia color blanca y rosada, la que identificaron inicialmente como cocaína.

Es el propio acusado quien admitió que transportaba esta carga, conociendo que se trataba de droga, pero sin saber de qué tipo se trataba, para lo cual había sido contactado en Santiago donde trabajaba como conductor de UBER por un cliente, para que concurriera a la intersección de las calles Pedro Aguirre Cerda con Antonio Machado, el cliente le habría ofrecido \$ 100.000 a cambio de llevar la droga al lugar que se le indicaba, la que por cierto sabía que estaba dentro la mochila, pues de lo contrario no se habría opuesto tan insistentemente a su revisión, como afirmó el funcionario Ávila.

Por lo tanto, se acreditó con prueba suficiente y de calidad la materialización de conductas constitutivas de los verbos rectores exigidos por el tipo penal.

En cuanto a la naturaleza de las sustancias incautadas, de ser sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de

dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, se demostró con la declaración del funcionario Fuentes Zúñiga que dio cuenta que fue contactado por el Sargento Ávila de la Subcomisaría “Diego Portales” para realizar una prueba de campo y de pesaje de sustancias incautadas en un procedimiento de fecha 7 de enero de 2023, las que luego de realizar las pruebas respectivas determinó que los 8 paquetes incautados contenían clorhidrato de cocaína, las que arrojaron un peso bruto de 7 kilos, 605 gramos y 100 miligramos, distribuidos en 8 paquetes de nylon envueltos en papel alusa.

En el oficio N° 7 remitido de la droga por parte de carabineros al Servicio de Salud O’Higgins, se precisó el gramaje del decomiso, tratándose de una cantidad considerable atendido el peso ya señalado. Las que fueron analizadas por el Instituto de Salud Pública, donde el perito Boris Duffau Garrido estableció que el contenido de las bolsas analizadas era clorhidrato de cocaína al 12 % y cafeína.

A través del informe de efectos y peligrosidad del clorhidrato de cocaína y de la cafeína, firmado por la perita Sonia Rojas Rondón, se tomó conocimiento de los graves efectos que produce en el organismo el consumo de estas sustancias, de manera combinada y por separado; la que es altamente adictiva, lo que lleva a las personas a aumentar el nivel consumo para lograr efectos placenteros, pudiendo sufrir una sobredosis con consecuencias fatales. Por lo tanto, la prueba testimonial, documental y pericial mencionadas permitieron establecer la naturaleza de las sustancias ilícitas incautadas; y considerando el gramaje descubierto 7.605,100 gramos de clorhidrato de cocaína al 12%, la posesión y transporte de estas sustancias que dañan la salud de las personas, bien jurídico protegido con este tipo penal, demuestra el propósito de que sería comercializada y distribuida a terceros.

El tercer presupuesto, que no exista autorización para esta actividad, resultó comprobado por el hecho que, dada la naturaleza de la sustancia incautada no existe ningún tipo de autorización que legitime esta actividad económica, pues se trata de la transacción de sustancias prohibidas por la ley 20.000.

NOVENO: Atendido lo razonado precedentemente, se descartó la pretensión de la defensa de recalificar este delito por el microtráfico previsto en el artículo 4° de la Ley N° 20.000, por el hecho el grado de pureza del clorhidrato de cocaína, alcanzó solo el 12%.

Es el caso, que uno de los bienes jurídicos que protege el delito en cuestión, importa la puesta en peligro del mismo, vale decir no exige un resultado lesivo concreto, y en esta categoría de ilícitos se encuentra la salud pública, y si bien existen muchas y variadas definiciones de aquella, lo que se pretende en este caso en particular es proteger todos los ámbitos de la salud, ya sea las que dicen relación con el bienestar físico, síquico y social de la persona, el que puede verse afectado por el efecto nocivo de estas sustancias, generando una eventual dependencia por el consumo frecuente de las mismas. Es en este orden de ideas, que independiente del grado de pureza de la sustancia incautada, que en este caso fue de 12 %, del total de la droga incautada - más de 7 kilos- el contenido nocivo de ella en su totalidad se estimó más que suficiente para producir los efectos que el informe del Servicio de Salud N° 3113-2023 firmado por doña Sonia Rojas, a lo que se une los altos ingresos que percibiría aquel que comercialice la droga, independiente del grado de pureza, pues aquella distribución y afectación a la salud, es lo que el legislador pretendió evitar.

CONDENA POR LOS DELITOS DE FINGIR AUTORIDAD O SER FUNCIONARIO PÚBLICO Y DE COHECHO

DÉCIMO: El delito de fingir autoridad del artículo 213 del Código Penal, señala *“El que se fingiere autoridad, funcionario público o titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título o el cumplimiento de determinados requisitos, y ejerciere actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. El mero fingimiento de esos cargos o profesiones será sancionado como tentativa de delito que establece el inciso anterior.”*

El referido artículo menciona dos tipos de comportamientos: el fingimiento, y, el ejercicio de actos propios de una profesión.

Sin embargo, para que el delito pueda llevarse a cabo no se requiere de un resultado determinado o que las conductas lesionen un bien jurídico, estando en presencia de un delito de mera actividad.

Ahora bien, resulta necesario definir qué se entiende por *fingir*, y de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española **1. tr.** Dar a entender algo que no es cierto; **2.tr** Dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. Entonces, fingir es aparentar algo que no se es, y en este caso en

particular se centró en la calidad de funcionario activo de Carabineros de Chile.

Sin embargo, de acuerdo con la descripción de la norma, el sujeto activo, además debía realizar actos propios del cargo atribuido, es decir, cualquier acción propia de las actividades realizadas por carabineros contenidas en su Ley Orgánica N° 18.961 o de la nutrida legislación a su respecto.

Por otra parte, se le tribuyó además participación en el **delito de cohecho** del artículo 250 en relación con el artículo 248 bis, ambos del Código Penal, se requiere acreditar: **a)** que la conducta desplegada por el sujeto activo consista en el ofrecimiento de un beneficio económico; **b)** que tal ofrecimiento sea realizado a un empleado público; **c)** sea en provecho de éste o de un tercero; y **d)** que el señalado ofrecimiento tenga como finalidad obtener que el referido empleado público incurra, para el caso que nos ocupa, en omisión de un acto debido propio de su cargo. Ilícito denominado doctrinariamente cohecho activo, soborno o cohecho del particular.

No se exige que efectivamente se entregue algo para que la conducta se consume al ser un delito de mera actividad, y el ofrecimiento puede ser en provecho del funcionario o de un tercero indistintamente, sino cualquier conducta que revele la proposición económica que un particular efectúa a un funcionario público.

UNDÉCIMO: Para probar lo anterior, se escuchó al carabinero Ávila González, quien como ya se dijo intervino en el procedimiento de fecha 7 de enero de 2023, y luego de proceder a la fiscalización del automóvil que conducía el acusado por no portar las placas patentes - ni la delantera ni la trasera- como se observó en las fotografías N° 1 y 2, el conductor, le indicó que era carabinero saliente del turno, y le exhibió rápidamente su placa identificatoria, y en el caso de la TIPCAR, mantenía una foto borrosa, lo que justamente llamó la atención del declarante y procedió a revisar tal información con Cenco, informándole que no figuraba en el registro, el mismo acusado le replicó que estaba en retiro temporal, pero de haber sido así debió hacer entrega de las tarjetas identificatorias. Luego, de consultar con SAICAR, se les señaló que Leal Avilez había sido de baja. Cuando revisaron el móvil en el que se trasladaba y después de hallar en el asiento trasero la mochila con 8 paquetes de sustancias prohibidas, el acusado a finde evitar su detención les

ofreció \$ 100.000 que portaba, la droga y un millón de pesos, que entregaría al lunes siguiente.

En lo referente a la calidad de ex carabinero, se escuchó al funcionario policial Valdés Ulloa, quien se desempeña en Asuntos Internos de Carabineros, confirmando que Felipe Leal Avilez se desempeñó como carabinero por 5 años, alcanzando el grado de carabinero, pero que fue dado de baja por temas de salud en marzo del año 2022. Agregó, además, que las tarjetas identificatorias aparecían como fidedignas, pero que contaban con un encargo por robo previo a estos hechos y cuando Leal aún estaba en funciones, encargo que realizó el mismo.

Es así como no hubo dudas que Leal Avilez se atribuyó la calidad de carabinero en circunstancias que ya no lo era desde marzo de 2022, lo que hizo para evitar una mayor revisión del móvil en el que se movilizaba, atendida la carga prohibida que llevaba. En este sentido, estos sentenciadores, estiman que su acción fue solo un “mero fingimiento”, pues así lo señaló el mismo carabinero Ávila, quien aportó un relato coherente y sin contradicciones, pues no realizó actos propios del cargo, como señaló la defensa, es decir no cursó partes, recibió denuncias o cualquier otra de las amplias y variadas funciones que realizan los funcionarios de Carabineros de Chile de acuerdo a su Ley Orgánica Constitucional N° 18.961, encuadrando su actuar en el inciso 2° del artículo 213 del Código Penal.

Ahora bien, también resultó establecido con esta misma prueba de cargo, que el acusado ofreció la suma de \$ 100.000 y parte o toda la carga de droga incautada – difieren en ello Ávila y el acusado- pero que en definitiva consistía en el ofrecimiento del dinero, que sí portaba y una eventual entrega de otro monto en días posteriores. Con relación a este último punto, ante dos declaraciones contrapuestas, se tendrá presente para estos efectos que el ofrecimiento consistió en el dinero en efectivo que llevaba consigo, ya que, de la valorización monetaria de la droga encontrada, no existieron antecedentes a este respecto, por lo que su determinación no puede quedar al arbitrio del tribunal. Por otro lado, haciendo eco de los argumentos de la defensa para resolver esta discrepancia, solo se escuchó a uno de los carabineros que intervino en el procedimiento, careciendo sus dichos de la corroboración necesaria, en este punto específico. Esta entrega de dinero solo tenía por propósito evitar su detención como el mismo acusado admitió y dijo a los

funcionarios “que sabían cómo era la cosa cuando lo echaban” haciendo clara referencia al hecho de haber salido de la Institución de Carabineros de Chile.

DÉCIMO SEGUNDO: Con estos antecedentes se pudo tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos: *El día 7 de enero del año 2023 en horas de la madrugada, personal de carabineros efectuaba un patrullaje preventivo por calle Edmundo Cabezas con la intersección del pasaje El Portillo en la comuna de Rancagua, momento en el cual un vehículo color blanco circulaba sin sus placas patentes por lo que personal policial procede a fiscalizarlo. El móvil era conducido por Felipe Leal Avilés, quien hizo entrega de su documentación personal y del vehículo, señalando que las placas patentes estaban en la maletera, lo que resultó efectivo. Al mismo tiempo se identificó como funcionario de carabineros que se encontraba saliente de servicio, exhibiendo una placa de servicio TIPCAR que es la tarjeta de identificación personal de carabineros, manteniendo una fotografía borrosa por lo que se consultó a CENCO por el funcionario, informándose que en el sistema de carabineros no figuraba como funcionario de la institución, manifestando el acusado en ese momento que se encuentran calidad de retiro, lo que llamó la atención del personal policial porque si estuviese con retiro temporal no debería andar con su placa de servicio, por lo que se procedió a la revisión del vehículo en su totalidad encontrando en el asiento trasero del vehículo una mochila de color gris, encontrando 8 paquetes de clorhidrato de cocaína, una sustancia de color blanca con rosado, envuelta en papel aluza, manifestando el acusado que el solo realizaba la entrega, señalándole a personal de carabineros comillas “usted sabe cómo es esta cosa cuando lo echan” ofreciéndoles la cantidad de \$100.000 en dinero efectivo y que se quedaran con la carga, para no detenerlo, sin embargo el personal policial procedido a la detención del acusado y a la incautación de todas las especies. Personal OS7 realizó la respectiva prueba de campo, arrojando como resultado que el peso de la sustancia era de 7 kilos 605 gramos y 100 miligramos de clorhidrato de cocaína que el imputado transportaba en ese vehículo.*

Los hechos así descritos configuraron los **delitos de tráfico ilícito de estupefacientes** del artículo 1° en relación con el 3° de la Ley N° 20.000; el **delito de fingir autoridad** del inciso 2° del artículo 213 del Código penal, y finalmente del delito de **cohecho** previsto en el artículo 250 en relación con el 248 bis, ambos del Código del ramo. Todos ellos en grado de ejecución de

consumados, pues el sujeto activo puso todo de su parte para concretar los delitos realizando las conductas descritas por el legislador.

PARTICIPACIÓN

DÉCIMO TERCERO: En los hechos acreditados participó el acusado Leal Avilez como autor ejecutor, lo que logró ser acreditado con la misma prueba de cargo descrita previamente, en especial por los dichos del carabinero Ávila González quien intervino en el procedimiento desde un inicio, identificando al conductor del vehículo donde se transportaba la droga, como el acusado Leal Avilez, además de ser quien se presentó como carabinero sin tener dicha calidad y realizó el ofrecimiento de dinero para evitar su detención. A ello se sumó el reconocimiento de todas estas acciones por parte del acusado de manera, entregando detalles y de las motivaciones para realizarlas, por lo que su participación en los delitos descritos previamente, lo fue de manera inmediata y directa de conformidad al artículo 15 N° 1 del Código penal. -

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS Y PENALIDAD:

DÉCIMO CUARTO: Favorece al acusado la atenuante de su irreprochable conducta anterior, prevista en el artículo 11 N°6 del Código Penal, ya que su extracto de filiación y antecedentes no registra anotaciones pretéritas y así se reconoció en la acusación fiscal.

Beneficia, además la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, demostrada con su declaración prestada libremente en la audiencia, en cuanto confesó su participación en todos delitos por los cuales se le condenó; lo que facilitó el desarrollo de la audiencia, a la fiscalía le permitió liberar prueba y permitió descartar cualquier duda sobre su intervención.

DÉCIMO QUINTO: La pena asignada al delito de tráfico ilícito de estupefacientes es la de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Por su parte, la pena asignada al delito de fingir autoridad, funcionario público y ejerciere actos propios de dichos cargos, será condenado a la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 20 UTM. En este caso, al tratarse la condena por la figura del inciso 2° del artículo 213 del Código Penal, será sancionado en grado de tentativa. Por último, el delito de cohecho, del artículo 248 bis del mismo código, será sancionado con la pena de

reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado.

En todos los casos favorece al acusado la existencia de dos atenuantes sin que le perjudiquen atenuantes de responsabilidad penal.

Por ello, en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y de acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Código Penal, concurriendo dos atenuantes y sin agravante que lo perjudique, se podrá imponer la sanción inferior en uno, dos o tres grados, según sea el número y entidad de las circunstancias, rebajándolo en este caso en un solo grado, es decir en presidio menor en su grado máximo, la que se impondrá en su mínimo legal, por estimar que es condigno con el hecho y las circunstancias que lo rodearon.

En cuanto al delito de fingir autoridad, al hacer aplicación del inciso 2° del artículo 213, se impondrá la pena inferior en dos grados a la indicada por ley, es decir, en la pena de prisión en su grado medio.

Para finalizar, en relación con el delito de cohecho, al concurrir dos atenuantes de responsabilidad y ninguna agravante, según lo señala el artículo 68 inciso 2° Código Penal, el tribunal podrá imponer la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo señalado por ley; por lo que en este caso solo se rebajará en un grado, imponiéndose la pena en el grado de la reclusión menor en su grado medio, en el cuántum que se indicará en lo resolutivo, estimándose por estos sentenciadores que su conducta, como ex funcionario de carabineros, al hacer un ofrecimiento para que otros funcionarios dejen de cumplir con sus obligaciones, merece un mayor reproche que el mínimo del marco punitivo.

En cuanto a las multas, se impondrán en un monto inferior al mínimo legal, atendido lo señalado expresamente en el artículo 70 del Código penal, en especial teniendo en consideración que desde el día de su detención ha estado privado de libertad sin generar recursos y la concurrencia de dos circunstancias atenuantes.

DÉCIMO SEXTO: Atendida la entidad de las penas que se aplicarán, estas deberán cumplirse de manera efectiva. No siendo procedente la concesión de una pena sustitutiva, por lo que no se analizará el informe sicosocial, elaborado por el sicólogo don Raúl Núñez Quiero, aportado por la defensa en la oportunidad procesal respectiva, por ser innecesario.

DÉCIMO SÉPTIMO: Si bien la fiscalía solicitó el comiso del automóvil en el que se trasladaba el sentenciado, a lo que no se opuso la defensa, lo

cierto es que el tribunal no está en condiciones de decretar tal medida, cuando ni siquiera se tuvo conocimiento de la placa patente identificatoria del móvil, ni se aportó certificado que lo acreditara, por lo que carece de información que permita singularizarlo.

DÉCIMO OCTAVO: Habiéndose dictado sentencia condenatoria y estando el acusado privado de libertad desde el 7 de enero de 2023, no ha estado en condiciones de generar recursos por lo que se le eximirá del pago de las costas.

Por lo razonado y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°6 y N° 9, 14 N°1, 15 N°1, 18, 24, 25, 26, 29, 30, 49, 50, 67, 68, 69, 70, 74, 213, 248 bis y 250 del Código Penal; 1, 2, 3 de la Ley 20.000; 45, 47, 295, 296, 297, 315, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; se declara:

I.- Se **condena**, sin costas, a **FELIPE IGNACIO LEAL AVILEZ**, ya individualizado, a la pena de **TRES (3) AÑOS Y UN (1) DÍA de presidio menor en su grado máximo** y el pago de una **multa equivalente a veinte (20) unidades tributarias mensuales**, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes previsto y sancionado en el artículo 3°, con relación al artículo 1°, de la ley 20.000, descubierto en la comuna de Rancagua el 7 de enero de 2023.

II.- Se **condena**, sin costas, a **FELIPE IGNACIO LEAL AVILEZ**, ya individualizado a la pena de **VEINTIÚN (21) DÍAS de prisión en su grado medio** y el pago de una **multa equivalente a una (1) unidad tributaria mensual**, más la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor del **delito de fingir autoridad, funcionario público o titular de una profesión** previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, ocurrido en la comuna de Rancagua con fecha 7 de enero de 2023.

III.- Se **condena**, sin costas, a **FELIPE IGNACIO LEAL AVILEZ**, ya individualizado a la pena de **DOS (2) AÑOS** de reclusión menor en su grado medio y el pago de una **multa de \$50.000**, más la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor del **delito de cohecho** del artículo 248 bis del Código Penal, ocurrido en la comuna de Rancagua con fecha 7 de enero de 2023.

Estas penas deberán cumplirse de manera efectiva, comenzando por la más grave, la que se contará desde el día 7 de enero de 2023, fecha de la detención del sentenciado y desde la cual ha permanecido en prisión preventiva por esta causa.

Si el sentenciado no pagase las multas impuestas, se hará aplicación a lo dispuesto en el artículo 49 del código penal.

Pero, de acuerdo con el artículo 49 del Código Penal, se deja constancia que el condenado queda exento de este apremio, por haber sido condenado a penas aflictivas que deberá cumplir de manera efectiva.

IV.- Se decreta el **comiso** de la droga incautada, sin perjuicio de su destrucción por el Servicio de Salud.

Una vez ejecutoriado el fallo, oficiase al Registro Electoral a fin de comunicar que el acusado fue condenado a penas aflictivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 18.556.

En su oportunidad, remítase los antecedentes al Juzgado de Garantía de Rancagua para el cumplimiento de la sentencia, y en especial, para dar observancia a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.970.

Se deja constancia que para la publicación de esta sentencia en la página web del poder judicial, no existen datos que reservar.

Devuélvase a los intervinientes los documentos incorporados durante la audiencia.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la jueza Paulina Bossy Chaparro.

RIT 427-2024.

RUC 2300025386-3.

Pronunciada por los Jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, don Cristian Fredes Hernández, don Raúl Baldomino Díaz y doña Paulina Bossy Chaparro.

Se deja constancia que la Magistrada Paulina Bossy Chaparro y el Magistrado Raúl Baldomino Díaz, no firman la sentencia que antecede, no obstante haber estado presente en el juicio oral y en la decisión, por encontrarse en Comisión de Servicio.


Lectura de sentencia:



RUC	RIT	Ámbito afectado	Detalle del Hito	Valor
2300025386-3	427-2024	RELACIONES.: LEAL AVILEZ FELIPE IGNACIO / COHECHO O SOBORNO COMETIDO POR PARTICULAR. ART.	-	-
		RELACIONES.: LEAL AVILEZ FELIPE IGNACIO / Trafico ilícito de drogas (Art. 3).	-	-
		RELACIONES.: LEAL AVILEZ FELIPE IGNACIO / FINGIMIENTO DE CARGOS O PROFESIONES .ART. 213 IN	-	-
		PARTICIPANTES.: Fiscal. - MARIÁNGEL PUGA MAXIMILIANO NORBERTO	-	-
		PARTICIPANTES.: Defensor privado. - ÁVILA SAONA CONSTANZA	-	-
		CAUSA.: R.U.C=2300025386-3 R.U.I.=427-2024	-	-

Dirigió la audiencia y resolvió - CRISTIAN FREDES HERNÁNDEZ


(La presente acta sólo constituye una relación resumida de lo obrado y resuelto en audiencia. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del Código Procesal Penal, los argumentos vertidos por las partes y el contenido fiel de la resolución se encuentran en el registro de audio.)

Certificación de audios:

**Respaldo**

 > Respaldo de Audios > 2024 > **427-2024** > 

☐ **Nombre** ▾

☐  2300025386-3-1071-241010-01-01- Audiencia lectura sentencia.mp3

/ADV